

ÉCOLE POLYTECHNIQUE – ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES

CONCOURS D'ADMISSION 2015

FILIÈRES MP, PC ET PSI

ÉPREUVE ÉCRITE DE LANGUE VIVANTE – (XEULCR)

ESPAGNOL

Durée totale de l'épreuve écrite de langue vivante (A+B) : 4 heures

Documents autorisés : aucun

PREMIÈRE PARTIE (A)
SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

Contenu du dossier : trois articles et un document iconographique pour chaque langue. Les documents sont numérotés 1, 2, 3 et 4.

Sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalisera une synthèse de celui-ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte de l'aire géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n'ajouter aucun commentaire personnel à sa composition.

La synthèse proposée devra comprendre entre 600 et 675 mots et sera rédigée intégralement dans la langue choisie. Elle sera en outre obligatoirement précédée d'un titre proposé par le candidat.

SECONDE PARTIE (B)
TEXTE D'OPINION

En réagissant aux arguments exprimés dans cet éditorial (document numéroté 5), le candidat rédigera lui-même dans la langue choisie un texte d'opinion d'une longueur de 500 à 600 mots.

A - Document 1

México bárbaro

La espantosa masacre de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ha provocado una indignación social sin precedente desde 1968. Es una reacción justificada y natural. Dada la historia remota y reciente de Guerrero, la tragedia tenía fatalmente que ocurrir, lo extraño es que no ocurriera antes y que las diversas instancias de gobierno no la previeran y evitaran. No todo México es Guerrero, pero así lo parece ahora.

Guerrero es un Estado rico en playas y recursos naturales (es nuestro primer productor de oro), pero padece una honda marginación : el 70% de sus habitantes vive en la pobreza. Su tasa de homicidios, cuatro veces superior a la media nacional, es la más alta del país, y acaso lo ha sido siempre. Guerrero fue ingobernable desde tiempos coloniales, acogió muy tarde la presencia de la Iglesia (su primer obispado es de 1819, casi tres siglos después de la Conquista) y fue teatro destacado de todas nuestras guerras nacionales.

En el Diccionario geográfico, histórico, biográfico y lingüístico del Estado de Guerrero, de Héctor F. López, casi cada página refiere una querrela entre montescos y capuletos, resuelta no con espadas sino con machetes. Su historia política ha sido una secuela de despojos, golpes, traiciones, desafueros, desconocimientos, derrocamientos, divisiones dirimidas a balazos y asesinatos. Desde el 27 octubre de 1849, fecha en que Guerrero nació como Estado, hasta el año de 1942 en que López publicó su libro, solamente un gobernador había terminado su período constitucional.

Nada de esto sospechaba yo cuando de niño emprendía con mi familia la travesía anual de vacaciones al edénico puerto de Acapulco. De pronto, en 1960, mientras las celebridades de todo el mundo inauguraban el Festival Internacional de Cine en Acapulco, recuerdo nítidamente la terrible noticia : en Chilpancingo, capital del estado, había ocurrido una matanza de campesinos. Para mí, y para muchos mexicanos, fue el fin de la inocencia : la reaparición del subsuelo violento de México, del México bárbaro. [...]

Con el nuevo siglo, un ominoso protagonista incrementó su presencia : el narcotráfico. Guerrero era el Estado ideal : una geografía accidentada (intrincadas e incomunicadas serranías), una ancestral cultura de la violencia, una sociedad resentida por las secuelas de la guerra sucia y tan pobre —en algunos sitios— como las zonas más depauperadas de África. Pero algo más atrajo irresistiblemente al crimen organizado : la corrupción política. En muchos municipios de Guerrero (y del país) los presidentes municipales y sus aparatos policíacos cobijan a los señores del narco, se asocian con ellos o, en algunos casos (como en Iguala), son ellos.

En Guerrero, el Gobierno estatal del PRD, que lleva casi diez años al mando de la entidad, contempló este vínculo de la política con el crimen sin inmutarse (eso en el mejor de los casos). El poder federal fue, cuando menos, omiso e ineficaz. Y el Ejército, que tiene una base importante cerca de Iguala, inexplicablemente dejó que la alianza perversa asentara sus reales.

La alianza prosperó. Hoy Guerrero concentra el 98% de la producción nacional de amapola. El presidente Obama citó recientemente un reporte de la DEA sobre un incremento del 324% en los decomisos de heroína en la frontera, entre 2009 y 2013. Buena parte proviene de Guerrero. No es casual que Iguala haya sido el epicentro de la tragedia : una narcociudad exportadora de

droga, gobernada por el crimen.

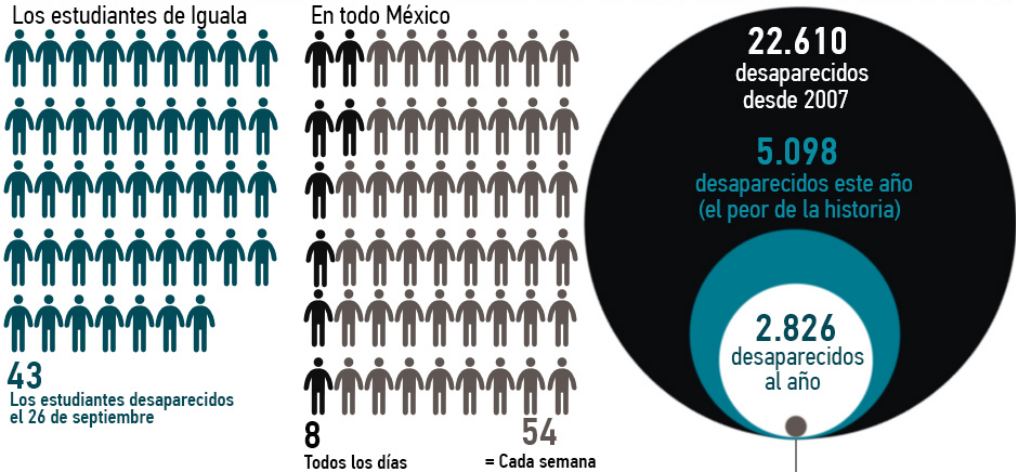
¿Y los estudiantes? Carecemos aún de información sólida, pero el motivo de su horrendo asesinato —digno de los campos de exterminio— parece haber sido este : con sus manifestaciones políticas, sus protestas cívicas y su idealismo revolucionario, estorbaban al negocio y el poder del presidente municipal y su esposa (ya capturados), aliados con el grupo criminal Guerreros Unidos. ¿Por qué matarlos? Por “revoltosos”, declaró uno de los asesinos.

Hace unos años en Monterrey un grupo de sicarios incendió el Casino Royal y provocó 53 muertos. Esa masacre prendió todas las alarmas. La sociedad, los empresarios, los medios colaboraron directamente en la renovación integral de las policías, invirtieron en obras sociales y educativas, fueron exigentes con el Gobierno estatal y, si no lograron acabar con el problema, lo volvieron manejable. Algo similar ha ocurrido en Tijuana y aún en Ciudad Juárez. Por sus niveles de marginación y bajísimo nivel educativo, difícilmente se podrá replicar el modelo en Guerrero.

México requiere un sistema de seguridad y de justicia que proteja lo más preciado, la vida humana. La incesante marea del crimen no solo debe detenerse, debe replegarse por la acción legítima de la ley. Cada día que pasa, el ciudadano —decepcionado de todos los partidos, los políticos y la política— se hunde más en el desánimo y la desesperación. Por eso, el Gobierno está obligado a tomar todas las medidas posibles para refutar a quienes —de manera injusta— acusan a México de ser un narcoestado. De la solución de fondo a esta alarmante debilidad del Estado de derecho depende —sin exagerar— la viabilidad de la democracia mexicana.

Enrique Krauze, *El País* (España), 10 de noviembre de 2014

BALANCE COMPLETO DEL DRAMA DE LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO



POR PRESIDENCIAS

Felipe Calderón
 del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012

Enrique Peña Nieto
 del 1 de diciembre de 2012 hasta hoy



NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CONSIDERADAS SECUESTRADAS O DESAPARECIDAS POR EL ESTADO



Fuente : actualidad.rt.com, 11/12/2014

A - Document 3

México frente a la violencia

Los lamentables sucesos de Iguala y la desaparición (probablemente eliminación y matanza) de 43 estudiantes de magisterio (normalistas) han puesto nuevamente a México frente a su mayor flagelo del siglo XXI : la violencia. El triunfo del PRI en las elecciones de 2012, la llegada de Enrique Peña Nieto al poder y su programa reformista parecían haber reconducido al país por derroteros diferentes al sexenio de Felipe Calderón (2006 – 2012) y su guerra contra el narcotráfico.

De repente el cántaro se ha roto y los mexicanos se han sumido nuevamente en una negra pesadilla. Otra vez todo se pone en cuestión, como la gobernabilidad, el peso del narcotráfico, la corrupción o la convivencia cívica. Hace bien Peña Nieto en preocuparse porque en este envite se juega una parte importante de su gobierno y del recuerdo que deje a las generaciones futuras. La preocupación debería alcanzar a todo el espectro político nacional y a todos los niveles del estado, comenzando por el federal, pero también a ayuntamientos y estados.

No es un problema fácil ni sencillo como muestra la historia reciente de Colombia, donde la mezcla de violencia política y narcotráfico agravó la situación. Pero en México las cosas no son más simples. La cercanía con Estados Unidos implica no sólo un vasto mercado para la droga sino también una vía relativamente sencilla de aprovisionamiento de armas. La violencia política es bastante residual y en absoluto comparable a la colombiana y de momento no se han establecido vínculos estables con los carteles.

Su fragmentación actual complica aún más el combate de las fuerzas estatales. La lucha encarnizada que mantienen las bandas por imponer su control territorial aumenta la violencia, el número de víctimas y la sensación de peligrosidad que transmiten. Para cumplir sus objetivos, no limitados al tráfico de estupefacientes, intentan vincularse cada vez más al poder local, corrompiéndolo hasta las raíces allí donde pueden.

Su labor se ve favorecida en aquellos estados, como Guerrero, donde la inacción o una cierta complicidad de los gobernadores facilita los objetivos criminales o no hace nada por erradicar el cáncer de la corrupción y los vínculos con el narco de las policías locales o estatales. Éste es sólo el principio. La debilidad de algunas instituciones como la justicia o el sistema carcelario favorecen la mayor implantación territorial del crimen organizado.

El caso de Iguala afecta a toda la clase política mexicana y a los principales partidos nacionales, comenzando por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), al cual pertenecen tanto el fugado alcalde de Iguala José Luis Abarca como el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre. Es necesario implicar a las tres mayores fuerzas nacionales (PRI, PRD y PAN) para sentar las bases de una profunda regeneración cívica. Algunos piensan que de no darse pasos significativos en este sentido habría consecuencias imprevisibles. De momento no se perciben condiciones para un estallido generalizado en demanda de mayor seguridad, pese a tratarse de una reivindicación social muy extendida, especialmente allí donde el azote criminal y del narcotráfico es mayor.

Hasta ahora Peña Nieto no se ha visto demasiado afectado por los acontecimientos. Tras un cierto retraso inicial en tomar una postura más proactiva para resolver el caso, se ha movido

con cierta habilidad. El envío de la Gendarmería y la captura de Sidronio Casarrubias, jefe de “Guerreros Unidos”, presuntos responsables en complicidad con las autoridades y la policía municipales del secuestro de los normalistas, son puntos en su haber.

Ahora bien, del rumbo que Peña Nieto siga en adelante, especialmente cuando aparezcan los cadáveres de los normalistas, dependerá buena parte de su futuro. Es ésta una ocasión de oro para impulsar una profunda reforma de las instituciones vinculadas con la seguridad y el combate al narcotráfico. Pese a que se trata de un proceso complejo y lento es urgente completar la puesta en marcha de la Gendarmería y la depuración de los numerosos cuerpos policiales. Al mismo tiempo hay que reformar la justicia penal mexicana. Sus laberínticos vericuetos son una de las mejores garantías de la impunidad de los delincuentes, especialmente aquellos que pueden pagarse buenos abogados.

La tarea no es fácil. Son muchos los que ganan con el status quo o intentan sacar partido de las dificultades del sistema, tanto entre los cómplices del narcotráfico como en la extrema izquierda. Pero el momento exige respuestas contundentes. Una frase extendida en sectores juveniles próximos a los narcotraficantes dice : “más vale vivir cinco años como rey que 50 como buey” Cinco años es la esperanza de vida de los sicarios próximos a los carteles. Las maras salvadoreñas y hondureñas están demasiado próximas como para olvidar su ejemplo. Si esto cunde, el futuro de México dejará con bastante posibilidad de ser tan promisorio como hoy aparece.

Carlos Malamud, *Infolatam*, 20 de octubre de 2014

A - Document 4

Ayotzinapa, el declive de Peña

Hasta el 26 de septiembre Ayotzinapa no significaba nada para Enrique Peña Nieto y tal vez ni siquiera sabía de su existencia. La noche de ese viernes, cuando estaba en la residencia presidencial, nadie le reportó el secuestro de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en la ciudad de Iguala, pese a que ahí se encuentra el cuartel militar del 27 batallón.

Hasta una semana después, cuando el escándalo ya había traspasado las fronteras y Ayotzinapa retumbaba por todos lados, Peña reaccionó y pronunció por primera vez ese nombre que ahora seguramente no olvidará, porque marcará la irresponsabilidad de su gobierno de no atender la principal demanda social : seguridad, que dejó a un lado para dedicarse a responder a los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y trasnacionales interesadas en el petróleo, minerales, telecomunicaciones y recursos naturales del país.

En su plan de gobernabilidad, Peña Nieto se sentía seguro con la estrategia de daños desplegada en Michoacán y el Estado de México, donde el crimen organizado sigue reinando con una violencia controlada desde los medios, pero actuante en las comunidades, pueblos y ciudades, con miles de víctimas violentadas todos los días.

Fue en Guerrero donde a Peña le reventó en la cara la realidad violenta, horrorosa, de tragedia y dolor que la mayor parte de los mexicanos viven diariamente, menos él y su equipo de gobierno, que habitan la burbuja de seguridad hecha de escoltas, soldados y policías que los acompañan hasta sus casas.

Y cuando la violencia le reventó como una granada, el mexiquense no supo qué hacer.

Enrique Peña Nieto venía disfrutando del trato aterciopelado que le daban los gobiernos y la prensa internacional, principalmente de Estados Unidos, que lo alababan y entronizaban como “el salvador de México” por las reformas estratégicas, en especial la energética, que abrió las puertas de la explotación del petróleo a las empresas trasnacionales.

Embelesado en la operación política que tejió su partido para lograr lo que no pudieron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón con las reformas laboral, educativa, telecomunicaciones y energética, Peña desdeñó en principio lo ocurrido en Ayotzinapa, quizá pensando que el escándalo habría de durar muy poco, un par de semanas, y luego se diluiría en la mar de violencia en la que está sumergido el país.

Tuvieron que pasar siete días para que el gobierno federal actuara, y 39 días para que la Procuraduría General de la República detuviera al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas.

Pero durante todo este tiempo los estudiantes siguen desaparecidos, y en las pesquisas del caso la Policía Federal encontró en Iguala 11 fosas clandestinas con 38 cuerpos que no han sido identificados.

Ahora, presionado por los familiares de los normalistas que le plantearon su desconfianza, además de las grandes movilizaciones dentro y fuera del país, y sobre todo de los gobiernos y organismos internacionales que han calificado la situación en México de “crisis de derechos humanos”, Peña intenta tapar el error de su gobierno (de no atender el principal reclamo ciudadano) con el llamado a un pacto por la seguridad en el país.

Ayotzinapa ya no será un nombre sin significado para Peña Nieto. Al contrario, significará y representará el declive de su gobierno que tanto quería brillar con las reformas estratégicas y que a la mitad del camino quedó eclipsado por la realidad que quiso manipular con sus aliados de los grandes medios de comunicación, principalmente Televisa.

José Gil Olmos, *Proceso* (México), 5 de noviembre de 2014

B - Document 5

OPINIÓN

Barbarie

El viernes pasado, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio una conferencia de prensa en la que expuso de manera fría, con claridad y precisión, sobre la brutalidad irracional y terrible a la que pueden llegar los seres humanos.

En ella informó, paso a paso, en voz de sus propios actores, de la masacre perpetrada contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El 27 de septiembre pasado, el mismo día de su captura, fueron asesinados y luego sus cadáveres quemados, destruidos y los restos esparcidos.

La presentación del procurador, con entrevistas grabadas de los asesinos donde confiesan lo que habían realizado, no deja a dudas sobre los hechos. Su exposición responde con claridad, pasaron más de 30 días, a lo que pasó y dónde sucedió, pero no porque ocurrió.

Los asesinos de los normalistas matan por matar. La vida, la de ellos y la de los demás, no tienen ningún valor. Han perdido toda dimensión de la realidad y actúan de manera irracional. Los acontecimientos duelen y avergüenzan.

Va a ser muy difícil, lo más probable imposible, que por la condición actual de los cadáveres se les termine por identificar. Se puede seguir diciendo que mientras esto no ocurre los normalistas siguen con vida, pero desgraciadamente no es así.

Los padres de los estudiantes asesinados pueden dar sentido a la muerte de sus hijos si se deciden, en medio de su inmenso dolor, iniciar y encabezar un movimiento nacional de “Nunca más otro Ayotzinapa”. Hay que poner un hasta aquí a los criminales y también a las autoridades.

La constatación de la barbarie presente en nuestra realidad, que lastima y ofende, no puede tener lugar en el país que todas y todos queremos. Este crimen brutal, como el de san Fernando, Tamaulipas, el de Tlatlaya, Estado de México, y otros muchos, desgraciadamente muchos más, deben tener fin.

En el México moderno e incluyente que todas y todos deseamos se tiene que superar la debilidad estructural del sistema de seguridad y de justicia. Es una obligación irrenunciable y responsabilidad de los tres niveles de gobierno y también de la sociedad.

La matanza de los normalistas, que ha conmocionado e indignado a la sociedad y también a la comunidad internacional, debe ser un parteaguas y marcar un antes y un después. Las autoridades no pueden minimizar los hechos y refugiarse en los discursos políticamente correctos.

Ellas deben mostrar con hechos que han iniciado el camino, para evitar que ocurran matanzas como las de los normalistas. La única oportunidad que tienen para obtener la confianza de la ciudadanía son realidades y no palabras. A sólo dos años de haber iniciado su mandato, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está a prueba. Ante la nueva realidad que se le presenta no queda claro cuál va a ser su respuesta. “Nunca más otro Ayotzinapa”.

Rubén Aguilar Valenzuela, *Infolatam*, 09/11/2014